

Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que ha comparecido el abogado Gabriel Zaliasnik Schilkrut, en representación de Roberto Guzmán Lyon, interponiendo el reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 70 de la Ley N° 21.000 en contra de lo resuelto por el Honorable Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero en la Resolución Exenta N° 1429, de 25 de febrero de 2022, por la cual se rechazó el recurso de reposición administrativo deducido por el señor Guzmán en contra del Oficio Ordinario N° 9305 de 28 de enero de 2022, en el que la aludida Comisión, ante la presentación mediante la cual la reclamante dio cuenta del pago íntegro de la multa que le fuera impuesta por la Resolución Exenta N° 223, de 2 de septiembre de 2014, de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, resolvió que dicho pago había sido parcial e incompleto; decisión esta última cuyos vicios de legalidad y constitucionalidad hizo suyos y profundizó la resolución reclamada de ilegalidad, lo que amerita que sea dejada sin efecto, decidiéndose en su lugar que se acoge la reposición y se declare que el pago referido es completo y suficiente.

Precisa que la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante CMF), actuando arbitraria e ilegalmente y en un ejercicio exorbitante de la potestad punitiva del Estado, estableció que el pago de la multa efectuado por el reclamante era sólo imparcial e incompleto, haciendo para ello aplicación de una norma legal derogada, lo que ha redundado en cuantiosos intereses y en un enriquecimiento ilícito para el Fisco de Chile, a pesar de que el pago íntegro se realizó oportunamente dentro del plazo que contempla la Ley N° 21.000.

La norma derogada a la que dio ultraactividad la CMF es el antiguo artículo 30 del Decreto Ley N° 3538, que computaba el devengo de intereses a partir del undécimo día de su imposición, prescindiendo de si el particular reclamaba jurisdiccionalmente de la multa. Con ello, aduce que Roberto Guzmán, por el sólo hecho de reclamar de ilegalidad en contra de la Resolución 223, que fue la que originalmente impuso la multa, fue objeto de un cómputo y devengo de intereses desde el año 2014 y hasta el año 2021, en el que pagó "*parcialmente*" según el pronunciamiento de la CMF, a pesar de carecer aquél de todo control sobre la tardanza de un proceso judicial. Así, fue sancionado por litigar a



pesar de que la normativa contenida en el antiguo Decreto Ley N° 3538 era explícita en que el pago de la multa no era exigible si se ejercían los derechos a reclamar de la ilegalidad del acto administrativo; atentándose por ende contra el debido proceso y el derecho a defensa.

La ilegalidad de lo decidido por la CMF estaría dado porque, en lugar de dar aplicación a la Ley N° 21.000, actualmente vigente, en virtud de la cual sólo se computan los intereses de la multa a partir de que esta es exigible, lo que ocurre cuando la resolución que la impone se encuentra firme y ejecutoriada, sostuvo que la multa proveniente de la Resolución N° 223, de 2 de septiembre del año 2014, devengó intereses a partir del onceavo día de su dictación, conforme al artículo 30 del derogado Decreto Ley N° 3.538, y por lo tanto acumuló intereses por casi 7 años, lo que multiplica la multa en cuestión, acrecentándola en más del doble del valor que los Tribunales Superiores de Justicia estimaron era jurídicamente correcto sancionar a mi representada.

Esta situación es inadmisibles en nuestro ordenamiento jurídico. La CMF debía declarar que Roberto Gúzman pagó la multa de manera completa, íntegra y oportuna, puesto que dicho pago se realizó dentro del plazo de 10 días hábiles que exige la nueva Ley N° 21.000. Su representado pagó la multa con la íntima convicción que lo hacía dentro de plazo, puesto que el Legislador lo había incorporado, al derogar el artículo 30 del Decreto Ley N° 3.538.

Indica que el criterio sentado por la CMF implementa una desigualdad ante la ley, entre quienes hayan sido sancionados por la ex Superintendencia de Valores y Seguros con anterioridad a la Ley N° 21.000 y aquellos que lo hayan sido por su continuadora legal, la CMF, ya vigente dicho cuerpo normativo, situación que se agrava al considerar la mayor extensión del proceso jurisdiccional de reclamo de multas que contenía el Decreto Ley N° 3.538 en comparación con el que actualmente establece la Ley ya referida.

A continuación la reclamante alude al contexto de la emisión de la resolución recurrida, manifestando que por la Resolución Exenta N° 223, de 2 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Valores y Seguros (o “SVS”) impuso a Roberto Guzmán Lyon una multa de 550.000 Unidades de Fomento, en el marco del denominado “Caso Cascadas”, la que fue manifiestamente desproporcionada y, si bien el reclamante



continúa con la convicción de no haber cometido ilícito alguno, fue confirmada en lo que a los hechos y su reproche se refiere, mas no en cuanto a su cuantía, que fue rebajada a aproximadamente un 13% de su valor original.

Explicó que, en cuanto al procedimiento judicial de reclamación de la multa impuesta, la demanda respectiva fue presentada ante el 16° Juzgado Civil de Santiago con fecha 26 de septiembre de 2014, dando origen a la causa rol N° C-21.305-2014 en la cual dicho tribunal, con fecha 11 de diciembre de 2017, dictó sentencia definitiva acogiéndola parcialmente en cuanto rebajó y determinó el monto de la multa en 75.000 Unidades de Fomento, previa declaración de inaplicabilidad por parte del Tribunal Constitucional. Dicha sentencia fue confirmada por esta Corte -y rechazado el recurso de casación en la forma deducido en su contra- con fecha 13 de mayo de 2020 en el ingreso rol 957-2018. Finalmente, la Excma. Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos contra el fallo de esta Corte, en causa rol N° 79.324-2020; dictándose el cúmplase respectivo con fecha 29 de septiembre de 2021, quedando sólo entonces, por ende, ejecutoriada, naciendo conforme lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 21.000 la obligación del sancionado de comparecer ante la CMF y dar cuanta del pago íntegro de la multa.

En razón de ello, indica, con fecha 7 de octubre de 2021, Roberto Guzmán Lyon pagó la multa y el día 15 del mismo mes y año, para acreditar el pago, acompañó ante la CMF el aviso de caja emitido por el Servicio de Tesorerías con igual fecha y el comprobante de pago emitido por el Banco de Crédito e Inversiones dando cuenta del pago de la suma de \$2.259.332.050, equivalentes a setenta y cinco mil unidades de fomento, según su valor al día 9 de octubre de 2021.

La CMF, en lugar de tener por concluido el procedimiento sancionatorio con dicho pago, inició un procedimiento administrativo ante la Contraloría General de la República al consultarle, mediante Oficio Ordinario N° 89924 de 29 de octubre de 2021, *“si las multas impuestas y notificadas al tenor del Decreto Ley N° 3.538, según su texto previo a la modificación introducida por la Ley N° 21.000, se rigen en lo atinente al pago de la multa y devengamiento de intereses, al texto original del citado Decreto Ley, o a las disposiciones que se encuentran vigentes*



actualmente y que son las vigentes al momento que los Tribunales resolvieron la reclamación de multa". El ente contralor se abstuvo de emitir pronunciamiento por no haber acompañado la CMF un informe jurídico fundado, conforme correspondía según instrucciones previas; por lo que con fecha 2 de diciembre de 2021, mediante Oficio Ordinario N° 98.591, la CMF, escapando a su propia competencia para decidir el asunto, acompañó dicho informe. Sin embargo, el organismo de control nuevamente, de manera acertada, se abstuvo nuevamente de pronunciarse por estimar que la consulta trataba sobre un asunto de evidente carácter litigioso.

Así, recién después de 4 meses desde la presentación que dio cuenta del pago ante la CMF, y a pesar de que conforme la tesis de ésta se seguían devengando intereses en ese lapso, emitió el Oficio Ordinario N° 9305 en el que denegó el pago total por los mismos argumentos que había comunicado a la CGR dos meses antes, con algunos cambios.

En el recurso de reposición que dio lugar a la resolución cuya legalidad ha sido reclamada, el señor Guzmán Lyon argumentó lo siguiente: a) La imposición de la obligación de pagar una suma exorbitante por intereses devengados durante el intervalo en que el procedimiento de reclamación de la multa estuvo pendiente, atenta contra respeto a la tutela judicial efectiva y al derecho de acción y constituye aplicación de la institución del *Solve et Repete*, tantas veces declarada inconstitucional; b) La interpretación de la CMF contiene un defecto de motivación, graves saltos lógicos y déficits argumentativos, careciendo de coherencia interna en su argumentación, por lo que la decisión es arbitraria, toda vez que no otorga ninguna razón de texto concreta para predicar la vigencia ultraactiva del derogado artículo 30 DL 3.538 y excluir la aplicabilidad del artículo 5° transitorio de la Ley N° 21.000; c) La ejecutoriedad del acto administrativo no es razón suficiente para delimitar una sanción bajo un régimen sancionatorio derogado e inconstitucional, porque se llegaría al absurdo de que la multa era exigible a partir del undécimo día de notificada la sanción. La CMF elige el concepto de ejecutoriedad cuando le conviene y lo descarta cuando le perjudica; d) El bloque normativo vigente al momento de rebajarse la multa es la Ley N° 21.000 y no el derogado DL 3538, primando el criterio de la exigibilidad de la Ley N° 21.000; y e) De primar la tesis de la CMF, se incurriría en un



enriquecimiento injustificado para la Administración a través del cobro de intereses sin base legal y en expresa contravención a la Constitución Política.

Afirma que el concepto de ejecutoriedad resume el argumento de la resolución recurrida, en cuanto considera que los actos administrativos devengan efectos (como los intereses de una multa), con lo que la dictación del acto habría incorporado en sí el cómputo de intereses y eso explicaría por qué el criterio del artículo 30 del Decreto Ley N° 3538 es capaz de sobrevivir a su derogación. Aduce que dicha tesis es un sinsentido, en cuanto la sanción puede ser rebajada e incluso dejada sin efecto, generando conforme a dicho criterio igualmente intereses. Además, si los genera, querría decir que los mismos son exigibles, ante lo cual el reclamante se pregunta si no estarían, entonces, prescritos en este caso.

Aduce que el legislador no sólo derogó el Decreto Ley N° 3538, sino que, además, donde estimó necesario dotar una de sus normas de ultraactividad, lo hizo expresamente en su artículo 5° transitorio.

La CMF en su resolución desconoció la vigencia de principios constitucionales tan asentados como son los “pro hominem” y el de aplicación retroactiva de la ley sancionatoria más favorable, descarta la aplicación de la tutela judicial efectiva y el derecho a la acción. En suma, lo que hizo la CMF fue aplicar una norma derogada, un criterio de ejecutoriedad cuya lógica no se sostiene en lo más mínimo, y desconocer la aplicación directa de principios y normas constitucionales estructurales de nuestro ordenamiento, por lo que su decisión es ilegal. Desconoce, asimismo, efectos a la vía jurisdiccional de impugnación sobre los actos administrativos reclamados, en cuanto para ella, mientras los actos no sean completamente dejados sin efecto, sus efectos perviven incólumes y no admiten modificación alguna.

Indica que lo pedido a la CMF es que interprete normas conforme a la Constitución, descartando posibles efectos contrarios a ella, en coherencia con el mandato que le empecé de los artículos 6 y 7 de la Carta.

Asimismo sostiene que la CMF afirma de manera incorrecta que la invocación del principio de la norma sancionatoria más favorable sólo tendría aplicación en sede penal, siendo por ende indiferente el hecho de



que el legislador haya modificado el criterio de cómputo de intereses por uno más favorable, aun reconociendo que la naturaleza de los intereses es sancionatoria.

Enseguida la reclamante reitera que en la especie la CMF no debió aplicar los artículos 30 y 34 del Decreto ley 3538, sino los artículos 59 y 62 de la ley N° 21.000, vigentes al momento de resolverse el reclamo jurisdiccional de la multa por el 16° Juzgado Civil de Santiago, conforme a los cuales (i) el plazo para consignar el pago íntegro de una multa en un procedimiento sancionatorio instruido por la autoridad financiera únicamente comienza a correr desde que dicha decisión se encuentre firme y (ii) los intereses generados por el retardo en el pago de una multa sólo comenzarán a devengarse desde que la multa se ha hecho exigible, es decir, cuando hubieren transcurrido todos los plazos legales para deducir recursos administrativos y judiciales en contra de ellos, o bien, en caso de haberse deducido alguno de ellos, una vez que hubieren sido resueltos y notificada dicha resolución conforme a derecho.

Esta última interpretación es la única solución compatible con un respeto a la tutela judicial efectiva y al derecho de acción, pues lo contrario sería una verdadera penalización contra quien reclame judicialmente y, finalmente, un doble castigo, a lo que se agrega que la propia estructura del artículo 30 del antiguo Decreto Ley N° 3538 es inconstitucional, por las razones ya enunciadas.

La CMF reconoce que se trata de un interés sanción que forma parte de ella y que por ende permitiría su devengo desde la ejecutoriedad del acto sancionatorio, pero ello esconde una naturaleza bimodal de los intereses para este caso, operando como uno de naturaleza moratoria porque subrepticamente castiga el retardo en el pago de la obligación, pero considerando en mora a quien, en rigor, no lo está, porque impugnó judicialmente la decisión administrativa que lo impuso.

Alega que no puede considerarse en mora a quien se encuentra cuestionando los fundamentos legales de la obligación, máxime cuando se trata de una sanción administrativa, siendo la propia ley de entonces la que establecía que la multa no debía pagarse en caso de ser reclamada judicialmente, debiendo pagarse sólo un monto por reclamar (en este caso fue 500 Unidades de Fomento, el tope a la fecha). La norma consagraba lo que se conoce en doctrina como *solve et repete*, idea que



repugna con nuestro ordenamiento en forma transversal, habiendo sido rechazada su vigencia en múltiples oportunidades por el Tribunal Constitucional.

Recuerda que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de *“interpretación conforme a la constitución”*, en virtud del cual ante la concurrencia una norma notoriamente inconstitucional, siempre debe preferirse la aplicación de aquella norma que sea compatible con nuestro orden constitucional. Luego, la interpretación de la ley conforme con la Constitución debe cumplir una función de garantía de los derechos fundamentales, de manera tal que pretender aplicar una norma derogada, existiendo una alternativa válida y vigente -artículos 62 y 59 de la Ley N° 21.000- con el objeto de justificar la aplicación de un régimen en extremo más gravoso a aquel vigente hoy, resulta del todo ilegítimo, inconstitucional y contrario incluso a los principios más básicos que regulan nuestro orden institucional.

Alega además que la ejecutoriedad del acto administrativo no es razón suficiente para justificar una sanción bajo un régimen sancionatorio derogado e inconstitucional.

En efecto, la inmediata eficacia de un efecto en particular no inhibe que pueda decaer posteriormente por concurrir un motivo de invalidez sobreviniente. Este motivo de invalidez sobreviniente hace que decaiga el efecto de cobro de intereses pretendido. Para el caso de la multa impuesta a Roberto Guzmán Lyon, hubo un pronunciamiento previo del Excmo. Tribunal Constitucional que declaró inaplicable la norma en que se fundó originalmente la multa impuesta por la ex SVS en el año 2014 a través de la Resolución N° 223.

Las declaraciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma base que motivó las sanciones -el ex artículo 29 del DL 3.538- fueron múltiples y consistentes en gestiones pendientes análogas a las del Sr. Guzmán, siendo el antecedente principal para que dicha norma fuera modificada posteriormente. Si el fundamento principal de la sanción fue declarado inaplicable por la Magistratura Constitucional, lo lógico es que los efectos que esa inconstitucional sanción produjo, no se hayan devengado desde el momento de su aplicación en el año 2014. Concorre entonces un motivo de invalidez sobreviniente. Si bien los intereses para octubre de 2014 habrían comenzado a correr en los términos del artículo



53 del Código Tributario – cuestión que, como decimos, se estructura sobre la base de una aplicación de una norma manifiestamente inconstitucional y por ello derogada – en el año 2018 dicho régimen sancionatorio era derogado justamente por lo antijurídico de su diseño. Se alteraban entonces los fundamentos que sustentaban la validez de dicho efecto, sustrayendo del ordenamiento jurídico el fundamento normativo que permitía su despliegue, instaurando criterios más favorables y alineados con un justo y racional procedimiento, cumpliendo el legislador con su mandato constitucional de adecuar el texto legal a la Carta Fundamental. El artículo 51 recién citado señala que el acto no tendrá inmediata ejecutoriedad *“en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario”*. Para este caso, existen normas legales que no solo derogaron el efecto de devengar intereses desde el undécimo día de notificada la resolución sancionatoria, sino que se tradujo en la introducción de un nuevo criterio más favorable que establece algo totalmente contrario: los intereses solo se devengan cuando la resolución se encuentre firme y sea exigible.

Además, cita el artículo 52 de la Ley N° 19.880, que dispone que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros, consagrando de esa manera el principio de favorabilidad. Sostiene que el artículo 30 del Decreto Ley ya referido no establece un efecto de cómputo de intereses inmediato, sino una fórmula de cálculo de los mismos sólo aplicable cuando la multa se encuentra en condiciones de ser cobrada, por lo que nunca se pudieron devengar sino hasta ahora, puesto que deducida oportunamente la reclamación, se suspenderá el plazo establecido para el pago de la multa, y la propia CMF reconoció que los intereses forman parte de ésta. Además, argumenta que de seguirse la tesis de la CMF, los intereses estarían prescritos.

Luego aduce que el legislador previó una nueva forma de cómputo de intereses al dictar la Ley N° 21.000, y la necesidad de una interpretación sistémica de las normas en cuestión, debiendo primar el criterio de la exigibilidad antes que el de la ejecutoriedad del acto administrativo. También reclama una motivación viciada del acto impugnado, por cuanto la CMF argumenta en una consideración



meramente legal la violación de garantías constitucionales, lo que importa que en la práctica no abordó todas las alegaciones levantadas por Roberto Guzmán relativas a la afectación del derecho constitucional a la acción y al debido proceso en relación a la tutela judicial efectiva.

Por todo lo anterior, pide acoger el reclamo y, en su mérito, ordenar a la CMF que acoja el recurso de reposición originalmente deducido contra el Oficio ya referido, disponiendo en consecuencia que el pago realizado por Roberto Guzmán Lyon respecto de la multa impuesta por la Resolución Exenta N° 223 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros fue suficiente, completo y oportuno, no devengando interés alguno.

Segundo: Que, en su informe, la Comisión para el Mercado Financiero adujo que la parte reclamante, a pesar de haber sido ya beneficiado, en virtud de un fallo del Tribunal Constitucional, con una rebaja de 475.000 Unidades de Fomento en la multa a la que fue sancionado, pues, de las 550.000 originales, sólo quedó condenado a pagar 75.000, ahora pretende rebajar aún más su sanción y dejar de pagar una suma que supera los \$3.100.000.000. Esto último pretende lograrlo mediante el presente reclamo de ilegalidad, que debiese ser rechazado ya que: a) No se dirige contra el acto administrativo de la CMF que aparentemente lo agravia, sino que exclusivamente contra la resolución que resuelve una reposición; b) Además, el reclamante no solicita se declare la ilegalidad del acto administrativo de la CMF contra el cual erróneamente se dirige; c) En efecto, lo que solicita, en primer lugar, es que se dicte una orden a la CMF *“(...) en razón de las ilegalidades e inconstitucionalidades denunciadas, ordenar a la CMF que acoja el recurso de reposición originalmente interpuesto”*. Aquello no corresponde en esta clase de contencioso invalidatorio; d) Aún más improcedente es que solicite además un pronunciamiento constitutivo de derechos. En efecto, solicita que se declare, -u ordene a la CMF que declare- que el pago realizado por Roberto Guzmán Lyon respecto de la multa impuesta fue *“(...) suficiente, completo y oportuno, no devengando interés alguno”* y, e) Finalmente, la solicitud hecha a la CMF y denegada por el regulador, en cuanto a la suficiencia del pago es improcedente. No se enmarca en un procedimiento de cobro. La CMF no ha cobrado la multa, por



corresponder a una competencia de la Tesorería General de la República.

Indica que la reclamante niega aplicación a los artículos 30, inciso 3º y 34, inciso 2º, del Decreto Ley N° 3538, vigentes a la época de la notificación de la multa, sin que exista norma jurídica alguna que impida su aplicación, toda vez que tal acto administrativo fue válidamente notificado el 5 de septiembre de 2014 conforme el artículo 36 del Decreto Ley ya referido en su texto vigente previo a su modificación por la Ley N° 21.000, produciendo inmediata ejecutoriedad y consolidándose los efectos de tal resolución sancionatoria. Conforme a dichas normas, la obligación de pagar la multa se radica en el pasivo del sancionado desde que es dictado y notificado el acto administrativo que se la impone, momento desde el cual dicha obligación hizo “*exigible*” causando ejecutoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 19.880.

Enseguida refiere lo decidido en la Resolución Exenta N° 223, de 2 de septiembre de 2014 de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros en cuanto resolvió sancionar a Roberto Guzmán con una multa de 550.000 Unidades de Fomento, y los principales hitos del procedimiento judicial de la demanda de reclamación en juicio sumario ante el 16º Juzgado Civil de Santiago rol N° C-21305-2014.

Aduciendo que conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto ley, la Resolución Exenta N° 223 provocó que al undécimo día de realizada tal diligencia, comenzaran a devengarse intereses respecto de la sanción impuesta, sin perjuicio que dicha sanción, considerando el monto establecido y los intereses respectivos, se encontrara suspendida en cuanto a su exigibilidad en el caso de realizarse su reclamación. Conforme a lo anterior, luego de resuelta la reclamación judicial intentada y quedando firme la resolución respectiva el 29 de septiembre de 2021, con fecha 7 de octubre de 2021 Roberto Guzmán pagó UF 75.000 ante la Tesorería General de la República como se observa en el Aviso Recibo Caja Tesorería Folio N° 007 20211007.

El 15 de octubre de 2021, Gabriel Zaliasnik, actuando en representación de Roberto Guzmán Lyon, realizó una presentación ante la Comisión para el Mercado Financiero dando cuenta del pago y acompañando el recibo indicado. En dicho escrito, el representante solicitó tener presente el pago realizado, considerándolo íntegro por no



haberse generado -en su concepto- intereses, multas, ni obligación adicional alguna.

A base de la solicitud presentada, atendido que los fondos relativos a la multa impuesta al Sr. Guzmán corresponden a una suma que debe ser pagada a beneficio fiscal, la Comisión para el Mercado Financiero a través de los Oficios Ordinarios N° 89.924 de 29 de octubre de 2021 y N° 98.591 de 2 de diciembre de 2021, solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República acompañando un informe jurídico conforme a lo requerido en el Oficio Circular N° 24.243 de 2015 del ente contralor.

En respuesta a lo anterior, a través del Oficio N° E1175746 de 17 de enero de 2022, la Contraloría General de la República resolvió abstenerse de realizar pronunciamiento sobre la consulta sometida a su opinión, fundándose en tener el asunto un carácter litigioso.

Así las cosas, a través del Oficio Ordinario N° 9305 de 28 de enero de 2022, la Comisión para el Mercado Financiero denegó la solicitud realizada por el Sr. Guzmán manifestando que el pago realizado fue incompleto y parcial, en atención a que el pago total de la multa debiera considerar el pago del total de esta y del total de los intereses prescritos por el legislador, devengados desde el undécimo día, intereses que conforme al artículo 34 del DL. N° 3538 en su versión previa al reemplazo efectuado por la Ley N° 21.000, corresponden al artículo 53 del Código Tributario.

Lo anterior, especialmente en atención a que las multas cursadas al amparo del antiguo texto del DL. N° 3538, vigente hasta el 15 de enero de 2018, fecha en que entró en funcionamiento la Comisión para el Mercado Financiero, debió incluir tanto el monto de la multa cursada, como los intereses devengados al tenor del artículo 30 del DL. N° 3538 vigente a la época en que se emitió la respectiva Resolución Sancionatoria, por lo que, en definitiva, un pago que no incluía los intereses aplicados según el citado artículo 30, fue incompleto y parcial.

Frente a lo resuelto en el Oficio Ordinario N° 9305, a través de presentación de 4 de febrero de 2022, el abogado Gabriel Zaliasnik, en la representación antedicha, dedujo recurso de reposición administrativa contra dicho oficio, solicitando dejar sin efecto la declaración de pago parcial e incompleto y en su reemplazo, proceder a resolver que el pago



respecto de la multa impuesta por la Resolución Exenta N° 233 sería completo y suficiente.

Sobre el recurso administrativo intentado, la Comisión para el Mercado Financiero a través de la Resolución Exenta N° 1429 de 25 de febrero de 2022 lo rechazó en todas sus partes.

Agrega que, en primer lugar, el presente reclamo de ilegalidad debe ser rechazado porque el Oficio ordinario N° 9305, de 15 de octubre de 2021, se encuentra firme y no es materia de este reclamo, por no haber sido impugnado, y por haber transcurrido el plazo de 10 días contemplado en el artículo 70 del DL N° 3538 para que cualquier interesado lo hubiese impugnado, por lo que en el caso de que esta Corte declare la ilegalidad del acto reclamado, aquel oficio quedará plenamente vigente, debido a que este reclamo no se dirige en su contra. Cita además el artículo 69 del aludido Decreto Ley.

En segundo lugar, aduce que no resulta posible acoger el reclamo en la forma solicitada, por cuanto de su petitorio se desprende claramente que lo que se peticiona no es una declaración de ilegalidad de un acto, sino que una orden a la Comisión para el Mercado Financiero a fin de que acoja el recurso de reposición y una declaración constitutiva de derechos, en cuanto a que el pago realizado por Roberto Guzmán Lyon fue suficiente, completo y oportuno, no devengando interés alguno. Ello desconoce, la naturaleza de este procedimiento, cuya competencia se encuadra en declarar la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, no siendo una instancia administrativa en donde quien resuelve puede sustituir una decisión privativa de la Administración, conforme se desprende del artículo 70 del Decreto Ley N° 3538. Excepcionalmente, y sólo en el caso de que nos encontrásemos ante una sanción ejercida dentro de la potestad sancionadora administrativa de la Comisión para el Mercado Financiero, solo la Excm. Corte Suprema, de manera exclusiva y excluyente, tiene competencia para modificar la sanción, de acuerdo al inciso final del artículo 71 del DL. N° 3538.

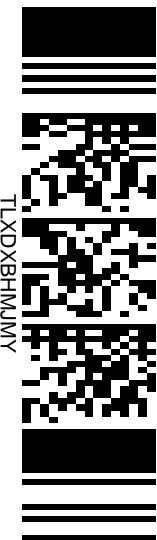
En la línea de lo anterior, argumenta que el reclamo debe ser rechazado, porque no procede, en su mérito, solicitar una sentencia constitutiva de derechos, como lo hace la reclamante, quien ha ejercido no otra cosa que una acción constitutiva, esto es, aquella mediante la cual se tiende a obtener una sentencia constitutiva que produce un nuevo



estado jurídico y cuyos efectos se extienden hacia lo futuro, pretensión que excede con largueza los márgenes de esta vía invalidatoria.

En cuarto lugar, razona en el sentido de que el reclamo debe ser rechazado porque la presentación del actor no se enmarca en un procedimiento de cobro, sino que tiene su origen -la resolución reclamada- en una presentación que éste hizo ante la Comisión el día 15 de octubre de 2021 dando cuenta del pago de la multa y acompañando el recibo respectivo., solicitando tenerlo presente y considerarlo íntegro, por no haber generado en su concepto intereses, multas ni obligación adicional alguno, lo que es jurídicamente improcedente porque atentos a los artículos 30 y siguientes del Decreto Ley N° 3538 de 1980, regulan con detalle esta materia y expresamente señalan que el pago debe hacerse ante la Tesorería General de la República. En efecto, conforme a dichas normas, es claro que, ejecutoriada la multa, el sancionado tiene 5 días para consignar la multa en la Tesorería General de la República, una vez ejecutoriada la multa. Si no lo hiciese, para obtener el pago de la multa, debe iniciarse un juicio ejecutivo, ante el Juez de Turno en lo Civil de Santiago, y, Dicho juicio debe ser llevado por la Tesorería General de la República conforme lo prescribe el DFL N° 1 de 1994. De esta forma, fuera de este marco, es del todo improcedente la solicitud hecha al regulador en cuanto a tener presente el pago realizado, considerándolo íntegro por no haberse generado *-en su concepto-* intereses, multas, ni obligación adicional alguna, ya que corresponde a una competencia de la Tesorería General de la República. Dicha solicitud contravino de forma expresa lo dispuesto en el DL. N° 3538 de 1980.

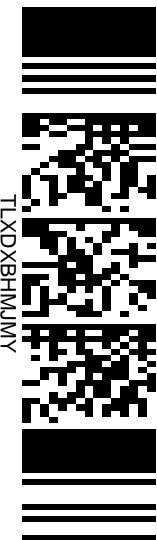
Enseguida, la Comisión reclamada argumenta que los intereses de la multa impuesta en virtud de la resolución exenta N° 233 de 2014 se rigen por lo dispuesto en los artículos 30 y 34 del Decreto ley N° 3538, según su texto vigente al momento de la notificación del acto administrativo sancionatorio. El artículo 30 de dicho cuerpo legal, según su texto vigente hasta su reemplazo en virtud de la Ley N° 21.000, disponía que, iniciado un procedimiento administrativo sancionador y a la postre notificado válidamente el acto administrativo terminal que resolvía aplicar sanciones ante la formulación de cargos, la deducción de reclamaciones judiciales no importaba eliminar el devengamiento de intereses. De dicha norma y de lo dispuesto en el artículo 34 referido,



queda claro que el legislador entregó al afectado por una multa administrativa la posibilidad de reclamar ante la Justicia su revisión, ello sin perjuicio de que se seguían devengando intereses, puesto que el deudor se encuentra en mora de cumplir desde el 11º día de notificada la multa. La mora del deudor de la multa impuesta por la SVS se origina desde que transcurren 10 días contados desde la notificación de la Resolución de la SVS que aplicó la sanción. Rechazados por sentencia ejecutoriada los argumentos con que los infractores pretendieron negar la existencia de la infracción, quedó corroborado que la contravención existió y por ello la sanción impuesta produce todos los efectos legales desde que se aplicó, y al no pagarse en la fecha establecida en el artículo 30 inciso 1º del DL. 3538, además de los reajustes, se devengan intereses moratorios, aunque la multa haya sido rebajada. En derecho, sólo se puede suspender el ejercicio de un derecho que se tiene y no de una mera expectativa.

Refiere que la obligación de pago de la multa debe entenderse suspendida mientras no se resuelva el reclamo contencioso-administrativo. Rechazado ese reclamo, la suspensión cesa y el Fisco puede requerir coactivamente su pago en tanto posee un crédito generado por la resolución administrativa respectiva. La argumentación contraria ignora absolutamente una importante diferencia entre esas dos clases de sanciones, y es que la sanción administrativa, como todo acto administrativo, se rige por el principio de la inmediata exigibilidad, es decir que son actos que producen sus efectos jurídicos y son ejecutivos y ejecutables desde su dictación, pues gozan de la presunción de legalidad.

A diferencia de la multa aplicada por una sentencia criminal, cuyo cumplimiento sólo puede darse una vez ejecutoriada que sea la sentencia de término, en este caso el reclamo que se interpone contra una multa administrativa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros sólo tiene el efecto de suspender el cobro de esta, y, por consiguiente, el derecho a cobrar dicha multa y sus intereses se radica en el patrimonio del Fisco en el momento de su aplicación, lo que ha sido reconocido por la doctrina y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, y recogido en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos en su artículo 3, inciso 8º.



Añade que los argumentos del reclamo confunden los planos y pretenden hacer creer que la sanción administrativa no existe hasta que finaliza el proceso contencioso administrativo, confundiendo ejecutividad con ejecutoriedad. La resolución administrativa que impuso la multa es un acto administrativo ejecutorio, esto es, que tiene la capacidad de generar una obligación de pago en el patrimonio del sancionado, y se rige por el texto normativo vigente a la época en que el acto fue notificado. El principio de ejecutoriedad está, además, recogido en el artículo 51 de la Ley N° 19.880.

Se extiende también el reclamo en torno a que la reclamación contencioso administrativa como revisión de un acto administrativo ejecutorio, supone que el derecho aplicable a la sanción administrativa sujeta a revisión es aquel vigente a la época de la dictación del acto administrativo reclamado, normativa inamovible que queda irremisiblemente arraigada, inclusive con anterioridad al reclamo judicial.

Indica, además, que la forma de computar los intereses de la sanción de multa bajo el esquema dispuesto por el legislador en el DL. N° 3538 vigente a la época de la notificación de la Resolución Exenta N° 223 de 2014, importa un mecanismo para lograr el fin disuasorio que la sanción administrativa trae aparejada, buscando eliminar los incentivos que la conducta ilícita genera y enervando el fraudulento acrecimiento del patrimonio del infractor. Aquello no es un atentado al derecho de propiedad del sancionado, pues éste con su conducta se ha procurado un incremento patrimonial ilegítimo que no tiene justificación y que por tanto no puede ser amparado por el Derecho.

Así, la eliminación del incremento patrimonial espurio viene dada por la multa, pero también por los intereses que tal suma produce en el tiempo, pues el fin disuasorio solamente se logra a través de la eliminación de las ganancias ilícitamente conseguidas y también los frutos que tales sumas generarían en el tiempo. De este modo, en la especie, la justificación de una multa elevada y también el momento en que comienzan a devengarse los intereses establecidos por el legislador, se ordenan a generar una fuerte disuasión en un mercado en que no solamente operan inversionistas de gran patrimonio y alta sofisticación en materias financieras, sino que también inversionistas institucionales que



operan con fondos que competen a múltiples personas comunes y corrientes.

A la luz de lo anterior, la aplicación “*con matices*” de las garantías penales al ámbito administrativo, involucra también analizar la subordinación de éstas a los específicos fines del Derecho Administrativo, sin trasladar sin justificación alguna, instituciones que se insertan en una rama diversa y con caracteres propios y que divergen en sus finalidades.

Por lo dicho, la forma de cómputo de los intereses de las multas impuestas, desde el undécimo día de notificada la resolución sancionatoria, al tenor del artículo 30 del DL. N° 3538 según su texto previo al reemplazo dispuesto en virtud de la Ley N° 21.000, se justifica en el diseño del sistema de reclamación judicial, pues la tramitación del juicio sumario y los recursos judiciales que podrían proceder importaría que los intereses, en tanto frutos civiles de las sumas correspondientes, ingresarían al patrimonio del infractor durante el tiempo que media entre la notificación del acto y la resolución de los recursos judiciales que fueran procedentes.

Es un error jurídico sostener que debieran aplicarse los nuevos artículos 59, 62 y 71, en lo que se refiere al devengo de intereses, a una sanción impuesta y reclamada judicialmente con anterioridad a su entrada en vigencia ello; i) Puesto que el legislador no lo dispuso así, al reemplazar el texto del DL. N° 3538, en virtud de la Ley N° 21.000, ii) Porque los intereses fueron previstos expresamente por el legislador, de modo han de entenderse también como una parte de la sanción impuesta; y iii) Porque los intereses ya se han devengado durante toda la tramitación judicial de la causa.

Concluye que el reemplazo del texto del antiguo Decreto Ley N° 3538 en nada altera que la ley que rige los intereses devengados resulta ser aquella vigente a la época de notificación del acto administrativo sancionador. El marco regulatorio sólo establece restricciones para la eficacia retroactiva de las resoluciones administrativas, al exigir de manera general para los actos administrativos en estos casos, que produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros³², no para la eficacia demorada, conforme se



desprende de lo dispuesto en los artículos 3 y 51 de la ley N° 19.880 y lo ha reconocido la doctrina.

Por consiguiente, una vez notificada una resolución exenta de la Superintendencia de Valores y Seguros, comenzaban a devengarse los intereses dispuestos en el antiguo artículo 34 del DL. N° 3.558 desde el undécimo día, sin perjuicio de que su exigibilidad quedara sujeta a la revisión judicial de lo resuelto por la administración. Así, en la eventualidad de que se rebajara la sanción, dejando sin efecto el monto de capital respectivo, quedarían sin efecto los intereses inherentes a dichas sumas y, en su caso, de acogerse un reclamo de ilegalidad y dejar sin efecto totalmente la sanción, desaparecerían también los intereses sobrevinientemente.

De esta forma, el reemplazo del texto del antiguo DL. N° 3538 en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 21.000 en nada altera que la ley que rige los intereses devengados resulta ser aquella vigente a la época de notificación del acto administrativo sancionador, momento en que sus efectos se incorporaron al patrimonio del sancionado. Aquello es lo que ha sido expuesto en los actos administrativos reclamados.

A lo anterior, agrega que la aplicación retroactiva de la ley sancionatoria más favorable se encuentra regulada en materia penal, sin que exista disposición en materia de derecho administrativo que permita aplicar, ante el cambio de regulación, la norma posterior más beneficiosa al sancionado.

Aduce que entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo hay diferencias bien claras, determinadas por sus diversos objetos y fines, que se expresan entre otros aspectos en los distintos propósitos que persiguen las sanciones pecuniarias como es la multa. Tal diferenciación entre la multa penal *-de naturaleza represiva, aflictiva o retributiva-* y la multa administrativa *-de naturaleza eminentemente preventiva orientada a la intangibilidad del sistema financiero y del ordenamiento económico especialmente regulado-*, se revela claramente en el artículo 49 del Código Penal, que permite la sustitución de la multa penal por reclusión en caso de no cumplirse aquella, situación que no ocurre con la multa administrativa, lo que devela su carácter exclusivamente patrimonial y no personal.



Una de las más importantes diferencias entre las sanciones penales y las administrativas radica en que estas últimas se rigen, justamente, por el principio de la “*inmediata exigibilidad*”, esto es, que los actos administrativos producen sus efectos jurídicos, son exigibles, ejecutivos y ejecutables, desde su dictación, pues gozan de una “*presunción de legalidad*”, según lo dispuesto expresamente por el inciso 3° del artículo 3° de la Ley N° 19.880, lo que no acontece con las sentencias judiciales penales desde que no existe a su respecto una norma legal semejante.

Es lo cierto que el legislador ha regulado ambos derechos de manera autónoma, sin que exista ningún principio o norma constitucional que, a diferencia de lo que acontece con las sentencias judiciales penales, impida la “*inmediata*” exigibilidad y ejecutoriedad de los actos administrativos, y, por tanto, su inmediata transmisibilidad. Tampoco existe ningún principio o norma constitucional que disponga la modificación de la carga pecuniaria impuesta como castigo, como sí existen los que consagran el derecho a defensa jurídica y al debido proceso.

Esta autonomía se manifiesta, por lo demás, en el principio de que un mismo hecho puede generar simultáneamente para su autor distintas responsabilidades jurídicas, como son la civil, la penal y la administrativa, y que cada una de ellas se encuentra regulada por su propio estatuto, de modo tal que, pudiendo el administrado ser liberado de responsabilidad penal pudiere sin embargo ser sancionado administrativamente.

En lo que en el presente caso interesa, esta autonomía se manifiesta, puntualmente, en que las resoluciones o decretos de la Administración que imponen multas administrativas, a diferencia de las sentencias de los Tribunales de Justicia que imponen penas penales, son exigibles, o sea, adquieren ejecutoriedad, en momentos diversos: aquellas, inmediatamente desde que se dictan y notifican al sancionado; éstas, desde que se cumplen los plazos para interponer recursos sin que se hayan deducido, o bien, desde que se desestiman por sentencia ejecutoriada los que hayan sido interpuestos.

La serena lectura y debida comprensión del artículo 20 del Código Penal no deja lugar a dudas de que las multas que impone la autoridad administrativa no constituyen penas penales; y que la intención o espíritu



del legislador penal, claramente manifestados en ella misma, ha sido el de excluirlas del ámbito de aplicación propio de las normas que conforman el derecho penal en su conjunto.

Recuerda que la aplicación de garantías penales a las sanciones administrativas debe hacerse cuidando no desconocer las finalidades propias que tiene el derecho administrativo sancionador. En particular, el cómputo de intereses en el marco de la regulación del DL. N° 3538, según su texto previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.000, se enmarca en un conjunto sistémico de normas que regulan la potestad sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros, que en lo que atañe a los mercados sujetos a su fiscalización y las entidades fiscalizadas sujetas a su acción, buscaban dar una respuesta adecuada para eliminar los beneficios que el infractor obtendría con su actuación ilícita y disuadir de la realización de conductas infraccionales.

Finalmente, discurre la reclamada en torno a que las normas transitorias dispuestas en la ley N° 21.000 no establecen la aplicación de la nueva regulación legal a situaciones acontecidas durante la vigencia del texto primitivo del Decreto Ley N° 3538; a que el reemplazo del texto del Decreto Ley N° 3538 en virtud del artículo primero de la ley N° 21.000 no altera el hecho que la norma original de dicho dl. es la que gobierna una situación jurídica consolidada en virtud de la notificación válida de la resolución exenta N° 223 de 2014, y a que el hecho de que se devenguen intereses desde que se aplique la sanción administrativa de multa no vulnera el derecho a un debido proceso, pues no lo hace el efecto del “solve et repete”.

Por todo lo anterior, concluye que las actuaciones reclamadas se dictaron en el ejercicio del mandato que la Constitución ha dispuesto expresamente a la CMF y a las atribuciones que la ley le otorga, tras la debida ponderación de los antecedentes del caso que fueron los elementos de juicio que permitieron arribar a las conclusiones contenidas en el acto, y que, por ende, resulta improcedente la reclamación de ilegalidad ya que, tratándose de actuaciones realizadas por un organismo competente en el ámbito definido por ley para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y vista la necesidad de esta, no existe ilegalidad alguna a la fecha que deba ser corregida por esta Ilustrísima Corte.



Pide en definitiva rechazar en todas sus partes la reclamación de ilegalidad, con costas.

Tercero: Que el artículo 70 de la Ley N° 21.000 establece en su inciso 1° lo siguiente: *“Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago”*.

El inciso 4° del mismo artículo, dispone: *“Interpuesto el reclamo, la corte deberá pronunciarse previamente sobre la admisibilidad de éste, para lo cual el reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto reclamado, la disposición que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica. Cuando corresponda, el reclamante deberá acompañar el certificado que acredite que el recurso de reposición no ha sido resuelto dentro de plazo legal en los términos del artículo 65 de la ley N° 19.880 o, en su defecto, copia del escrito por medio del cual se solicita la expedición de dicho certificado. La corte rechazará de plano el reclamo de ilegalidad si la presentación no cumple con las condiciones señaladas en el presente inciso”*.

Cuarto: Que de las normas precedentemente transcritas se desprende que, para que pueda prosperar la acción que contempla el artículo 70 de la Ley N° 21.000, la misma debe estar dirigida en contra de un acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, el que debe no corresponder a una resolución que imponga una sanción o que hubiere rechazado total o parcialmente el recurso de reposición deducido en contra de ella. En segundo lugar, el acto reclamado debe ser ilegal y, por último, debe perjudicar al reclamante.

Quinto: Que, en relación con lo primero, esto es, que el reclamo se dirija en contra de uno de aquellos actos que la ley permite, aparece claro de la lectura del libelo pretensor que la acción se ha interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 1.429, de 25 de febrero de 2022, emanada del Honorable Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante la cual se rechazó un recurso de reposición administrativo



deducido en contra del Oficio ordinario N° 9.305 de 28 de enero de 2022, mediante el cual dicha Comisión resolvió que el pago realizado por Roberto Guzmán Lyon respecto de la multa que le fue impuesta, fue parcial e incompleto.

De esta manera, es prístino que el acto objeto del reclamo se inscribe entre aquellos en contra de los cuales el mentado artículo 70 permite dirigirlo, pues a fin de cuentas por su intermedio la autoridad rechaza un recurso de reposición administrativa deducido en contra de una resolución que tuvo el pago hecho por la reclamante sancionada, como parcial e incompleto.

Sexto: Que, en lo que dice relación con el requisito consistente en que el acto objeto del mismo sea ilegal, viene al caso recordar los siguientes hitos de la sanción de multa impuesta al reclamante, cuyo pago ha sido estimado como parcial e incompleto:

1.- Con fecha 2 de septiembre de 2014, la entonces Superintendencia de Valores y Seguros dictó la Resolución Exenta N° 223, mediante la cual resolvió sancionar a Roberto Guzmán Lyon con una multa ascendente a 550.000 Unidades de Fomento, y los principales hitos del procedimiento judicial de la demanda de reclamación en juicio sumario ante el 16° Juzgado Civil de Santiago rol N° C-21305-2014.

2.- El día 26 de septiembre de 2014, Roberto Guzmán Lyon interpuso demanda de reclamación en juicio sumario en contra de la Superintendencia, por la aludida Resolución N° 223.

3.- Mediante sentencia de fecha 11 de diciembre de 2017, el 16° Juzgado Civil de Santiago, en los autos rol N° C-21.305-2014 acogió parcialmente dicha reclamación en cuanto rebajó el monto de la multa a la cantidad de 75.000 Unidades de Fomento.

4.- Recurrida de casación en la forma y apelación dicha sentencia, el día 13 de mayo de 2020 fue confirmada por esta Corte de Apelaciones (rol Corte N° 957-2018).

5.- Con fecha 23 de julio de 2021 la Excma. Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos contra el fallo de esta Corte de Apelaciones (Rol de ingreso Excma. Corte Suprema N° 79.324-2020) .



6.- El día 29 de septiembre de 2021 se dictó el cúmplase respectivo, quedando afirme, en consecuencia, lo resuelto por el tribunal de primer grado.

7.- Con fecha 7 de octubre de 2021, Roberto Guzmán Lyon pagó las 75.000 Unidades de Fomento ante la Tesorería General de la República, como se observa en el Aviso Recibo Caja Tesorería Folio N° 007 20211007.

8.- El 15 de octubre de 2021, Roberto Guzmán Lyon realizó una presentación ante la Comisión para el Mercado Financiero dando cuenta del pago y acompañando el recibo indicado, en la que pidió tener presente y considerar íntegro el pago por no haberse generado intereses, multas, ni obligación adicional alguna.

9.- Con fechas 29 de octubre de 2021 y 2 de diciembre del mismo año, mediante los Oficios Ordinarios N° 89.924 y 98.591, respectivamente, la Comisión para el Mercado Financiero solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República, acompañando un informe jurídico conforme a lo requerido en el Oficio Circular N° 24.243 de 2015 del ente contralor.

10.- Mediante Oficio N° E1175746, de fecha 17 de enero de 2022, el referido ente contralor resolvió abstenerse de realizar pronunciamiento sobre la consulta sometida a su opinión, por estimar que se trataba de un asunto con carácter litigioso.

11.- A través del Oficio Ordinario N° 9305, de 28 de enero de 2022, la Comisión para el Mercado Financiero resolvió denegar la solicitud realizada por el señor Guzmán Lyon manifestando que el pago realizado fue incompleto y parcial, en atención a que el pago total de la multa debiera considerar, además de su capital, el total de los intereses ordenados por el legislador devengados desde el undécimo día, los que según lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Ley N° 3538 -en su versión previa al reemplazo efectuado por la Ley N° 21.000- corresponden a los del artículo 53 del Código Tributario.

12.- Con fecha 4 de febrero de 2022 el abogado Gabriel Zaliasnik, en representación de Roberto Guzmán Lyon, dedujo recurso de reposición administrativa contra dicho oficio, solicitando dejar sin efecto la declaración de pago parcial e incompleto y, en su reemplazo, se resuelva



que el pago de la multa impuesta por la Resolución Exenta N° 233 fue completo y suficiente.

13.- Finalmente, por Resolución Exenta N° 1429 de 25 de febrero de 2022, la Comisión para el Mercado Financiero resolvió, de manera fundada, rechazar en todas sus partes el recurso de reposición administrativo. Como se ha adelantado, este es el acto en contra del cual se ha dirigido la presente acción de legalidad.

Séptimo: Que, en síntesis, el reclamo de autos hace consistir la ilegalidad de la Resolución Exenta N° 1429 en que, para desestimar el recurso de reposición administrativo, razonó y concluyó -erradamente a su juicio- que es aplicable en la especie el derogado artículo 30 del Decreto Ley N° 3538, que computaba el devengo de intereses a partir del undécimo día siguiente a la notificación de la resolución que impuso la multa -prescindiendo de si el particular sancionado reclamaba jurisdiccionalmente de ella o no-, con lo que tuvo por legalmente correcto el criterio asentado en la Resolución N° 9.305 en orden a que la multa originalmente impuesta a Roberto Guzmán Lyon devengó intereses desde el año 2014 -en el que fue impuesta- hasta el año 2021, en el que fue pagada; todo ello en circunstancias que, conforme a las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.000 -vigente al momento de quedar ejecutoriada la sentencia que resolvió la reclamación judicial ya referida- las multas que dicta la hoy Comisión para el Mercado Financiero, organismo sucesor de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, sólo computan intereses a partir de que dicha sanción es exigible, esto es, en caso de ser reclamada la multa, desde que queda afirme la sentencia que resuelve la reclamación judicial deducida en su contra; normativa ésta que, a juicio del actor, es la que debe recibir aplicación en la especie.

Octavo: Que, de esta manera, la decisión en torno a la legalidad del acto reclamado en autos, pasa por establecer si la regulación legal relativa a la oportunidad desde la cual se deben computar los intereses de la multa impuesta a Roberto Guzmán Lyon, es la que estaba vigente cuando aquella fue impuesta el año 2014, esto es, la del Decreto Ley 3538 en su redacción previa a la vigencia de la Ley N° 21.000, en cuyo caso la resolución reclamada se ajustaría a la legalidad, o bien el régimen establecido en esta última ley, en cuyo caso el acto objeto de la presente



acción sería ilegal, por no haber aplicado una ley debiendo hacerlo y, en su lugar, haber sustentado su decisión en una normativa derogada y, por lo mismo, inaplicable en el caso concreto.

Noveno: Que, llegados a este punto, es útil recordar que el artículo 30 del Decreto Ley N° 3538, en su redacción anterior a la vigencia de la Ley N° 21.000, disponía lo siguiente:

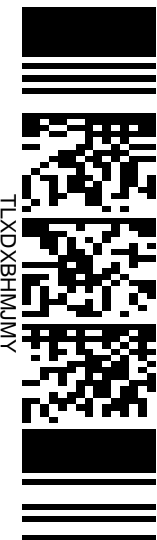
“Artículo 30.- El monto de las multas aplicables de conformidad a la ley será fijado por el Superintendente y deberá ser pagado en la Tesorería Comunal correspondiente al domicilio del infractor, dentro del plazo de diez días, contado desde que la Superintendencia notifique su resolución mediante el envío de carta certificada, ingresándose los comprobantes respectivos en sus oficinas dentro de quinto día de efectuado el pago.

El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa o de su monto ante el juez de letras en lo civil que corresponda, dentro del plazo de diez días de indicado en el inciso anterior, previa consignación del 25% del monto total de la multa, en la Tesorería General de la República. La consignación no podrá ser superior al equivalente a 500 unidades de fomento o a 1.000 unidades de fomento, si la multa se aplicare a una persona natural o a una persona jurídica, respectivamente, salvo que se trate de infracciones reiteradas o de aquellas del Título XXI de la ley N° 18.045 en cuyo caso se deberá consignar el 25%.

Deducida oportunamente la reclamación, se suspenderá el plazo establecido para el pago de la multa, sin perjuicio que los intereses a que se refiere el artículo 34, se devenguen desde el undécimo día de notificada la resolución de la Superintendencia que aplicó la multa. En todo caso, la notificación de la demanda deberá practicarse por cédula conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los diez días hábiles siguientes de vencido el plazo para su interposición.

La reclamación se resolverá en juicio sumario y su sentencia podrá ser apelada.

Las sentencias de primera y segunda instancias que no den lugar a la reclamación, condenarán necesariamente en costas al reclamante.



El pago de la multa más los reajustes e intereses a que se refiere el artículo 34 deberán efectuarse dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo”.

A su turno, el artículo 34 del mismo cuerpo legal disponía: “*El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.*

Si la multa no fuere procedente y, no obstante, hubiese sido enterada en arcas fiscales, la Superintendencia o el Juzgado respectivo, según corresponda, deberá ordenar se devuelva debidamente reajustada en la forma que señalan los artículos 57 y 58 del Código Tributario”.

Décimo: Que, por su parte, la Ley N° 21.000, que “*Crea la Comisión para el Mercado Financiero*”, publicada en el Diario Oficial el 23 de febrero de 2017, en su artículo primero reemplazó el texto del Decreto Ley N° 3.538 de 1980, del Ministerio de Hacienda, por el que en ella se contiene.

En lo atinente a lo debatido en autos, viene al caso relevar lo que disponen sus artículos 59, 62 y 5° transitorio.

Así, el artículo 59 establece: “*La sanción aplicada por el Consejo que consistiere en una multa deberá ser pagada en la tesorería comunal correspondiente al domicilio del infractor, dentro del plazo de diez días, contado desde que la resolución del Consejo se encuentre firme. La persona sancionada deberá ingresar los comprobantes de pago respectivos en las oficinas de la Comisión dentro de quinto día de efectuado el pago. Si la persona sancionada no tuviere domicilio en Chile podrá enterar el pago de la multa correspondiente en la Tesorería Comunal de Santiago.*

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá que la resolución del Consejo se encuentra firme cuando han transcurrido los plazos que disponen los artículos 69 y 71 sin que se hayan interpuesto los correspondientes recursos, o bien, habiéndose interpuesto, desde la notificación de la resolución expresa que resuelva el rechazo total o parcial de los mismos.

Encontrándose firme la resolución del Consejo, la Tesorería General de la República podrá demandar ejecutivamente al infractor ante el juzgado de letras con competencia en lo civil correspondiente a su



domicilio, acompañando copia de la resolución del Consejo que aplicó la sanción o de la sentencia ejecutoriada en su caso, la que tendrá, por sí sola, mérito ejecutivo.

En el respectivo juicio ejecutivo, la oposición del ejecutado deberá ser presentada dentro de quinto día contado desde su notificación”.

Por su parte, el artículo 62 del mismo cuerpo legal prescribe: “*El retardo en el pago de toda multa aplicada por la Comisión, en conformidad con la ley, devengará los intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario, desde que se hubiere hecho exigible.*

Si la multa no fuera procedente y, no obstante, hubiese sido enterada en arcas fiscales, la Comisión o la Corte de Apelaciones de Santiago, según corresponda, deberán ordenar que se devuelva debidamente reajustada en la forma que señalan los artículos 57 y 58 del Código Tributario”.

Finalmente, en su artículo 5° transitorio, dispone: “*Los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad a la fecha del comienzo de actividades de la Comisión para el Mercado Financiero seguirán tramitándose conforme a las normas vigentes a la fecha de iniciación de los mismos”.*

Undécimo: Que, como se puede advertir de la simple lectura de las normas legales transcritas en los dos motivos precedentes, bajo la vigencia de las normas del derogado Decreto Ley N° 3538, el monto de las multas que imponía la Superintendencia de Valores y Seguros debía pagarse dentro de los 10 días siguientes a su notificación. Sin embargo, si el sancionado reclamaba judicialmente de ellas, dicho plazo para el pago quedaba suspendido hasta que la sentencia que rechazare el reclamo quedara ejecutoriada, concediendo la ley al infractor, en este caso, un plazo de cinco días para realizar el pago.

A pesar de ello, en lo que atinente a los intereses por el retardo en el pago de la multa, dicha normativa establecía que se devengarían igualmente -esto es, aunque se hubiese interpuesto reclamación judicial de la multa que suspendiera la exigibilidad de ésta- desde el undécimo día siguiente a la notificación de la resolución que la impuso.

Es decir, bajo el sistema imperante entonces, los intereses (accesorios) se devengaban aún cuando la multa (sanción y obligación principal) no fuera exigible debido a la interposición de la reclamación



judicial; a lo que cabe agregar que, a la luz de lo que disponía el inciso final del mismo artículo 30, aquel devengo operaba incluso a pesar de que ni siquiera los propios intereses eran exigibles, pues, en caso de existir reclamación, dicho inciso final establecía que *“El pago de la multa más los reajustes e intereses a que se refiere el artículo 34 deberán efectuarse dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo”* (el subrayado es nuestro).

Pues bien, dichas normas legales fueron reemplazadas completamente por la Ley N° 21.000, salvo en cuanto a las reglas de tramitación de los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad a la fecha del comienzo de actividades de la Comisión para el Mercado Financiero, que debieron seguir sustanciándose conforme a las normas vigentes a la fecha en que se iniciaron, como se desprende de su artículo 5° transitorio.

Al efecto, dicha Ley en sus artículos 59 y 62 estableció que las multas que impusiere el Consejo, debían ser pagadas dentro del plazo de diez días contado desde que la resolución se encuentre firme -no meramente desde su notificación-, fecha desde la cual su pago se haría exigible, por cuanto sólo a partir de entonces la Tesorería General de la República podría demandar ejecutivamente al infractor ante el juzgado de letras con competencia en lo civil correspondiente a su domicilio. En armonía con ello, el retardo en el pago de toda multa aplicada por la Comisión -el que sólo podría producirse, como es natural, a partir del undécimo día siguiente a que la resolución se encuentre firme- devengaría los intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Duodécimo: Que, ahora bien, en el contexto normativo descrito y a la luz de lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del Código Civil, la recta inteligencia de los artículos 1° (permanente) y 5° transitorio de la Ley N° 21.000 permite concluir que esta última norma establece -en lo concerniente al caso de autos- que la totalidad de la regulación del Decreto Ley N° 3538 fue reemplazada, perdiendo vigencia y tornándose en consecuencia inaplicable, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.000, excepto -exclusivamente- en lo relativo a las normas sobre tramitación de los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad a la fecha del comienzo de actividades de la Comisión para



el Mercado Financiero; los que debieron seguir sustanciándose conforme a las normas vigentes a la fecha en que se iniciaron, pues así se desprende de la lectura *a contrario sensu* del referido artículo 5° transitorio; norma excepcional que, de acuerdo a su tenor, entonces, únicamente dio ultraactividad al Decreto Ley N° 3538 en dicho aspecto, debiendo por ende entenderse que, en todo lo demás, rigen las normas permanentes de la ley, atendido el reemplazo orgánico que dispuso en su artículo 1° en relación a las normas de aquel antiguo Decreto.

De esta manera, la oportunidad desde la cual se devengan y se deben, por tanto, computar los intereses por el retardo en el pago de las multas, quedó regida, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.000, por esta última, incluso tratándose, como en el caso de autos, de multas impuestas con anterioridad pero cuyo reclamo sólo vino a resolverse definitivamente estando vigente la nueva ley; pues en este aspecto las disposiciones del antiguo decreto ley -al no ser de aquellas que expresamente señala el artículo 5° transitorio ya referido- no puede estimarse que posean ultra actividad y que, por ello, deban recibir aplicación.

Esta inteligencia de los artículos 1° permanente y 5° transitorio de la Ley N° 21.000 se impone por aplicación del elemento sistemático de hermenéutica legal consagrado en el artículo 22 del Código Civil, puesto que -dicha interpretación- resulta armónica con lo dispuesto en otras leyes que sirven para ilustrar su sentido y alcance en el caso particular, a saber, los artículos 647 y 1559 del Código Civil; 18 del Código Penal y 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República.

En efecto, el artículo 647 del Código Civil establece que se llaman frutos civiles, entre otros, “los intereses de capitales exigibles”. En consecuencia, vincula la existencia de los intereses a la exigibilidad del capital al que acceden. De esta suerte, no siendo exigible el capital -en el caso de autos la multa-, no pueden devengarse intereses; idea que se reitera en el artículo 1559 del mismo cuerpo legal, que conceptúa a los intereses como una indemnización de perjuicios por la mora y, por ende, nuevamente vincula la existencia de aquéllos a ésta.

Pues bien, de esta manera la interpretación según la cual el artículo 5° transitorio en relación con el 1° permanente de la Ley N° 21.000 prescribe, a contrario sensu, que, en lo que acá interesa y en la



especie, la oportunidad desde la cual se devengan los intereses de la multa impuesta a Roberto Guzmán Lyon por la ex Superintendencia de Valores y Seguros se rigen por la Ley N° 21.000, emana de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Civil, en cuanto es armónica con los artículos 647 y 1559 del mismo cuerpo legal, puesto que, al igual que estos, discurre sobre la base de que los intereses comienzan a devengarse sólo a partir de que el capital al que acceden -y ellos mismos- se hacen exigibles.

Por el contrario, la interpretación que ha sostenido la reclamada en el acto impugnado -en el sentido de que el artículo 5° transitorio ya aludido no tendría aquel sentido y, en consecuencia, la fecha de inicio del cómputo de los intereses se rige, en la especie, por el antiguo Decreto Ley N° 3538, es totalmente contraria y pugna con los mentados artículos 647 y 1559, en cuanto permite entender que en este caso los intereses se devengaron desde el undécimo día siguiente a la notificación de la resolución que impuso la multa en el año 2014, a pesar de que lo principal, el capital al que acceden, esto es, la multa, se hizo exigible sólo después de que la reclamación judicial interpuesta en su contra quedó ejecutoriada en el año 2021.

También la inteligencia que se viene sosteniendo de los artículos 1° permanente y 5° transitorio de la Ley N° 21.000, según la cual ésta regula lo relativo al devengo e inicio del cómputo de los intereses de la multa que fue reclamada judicialmente, se aviene con el principio que emana del artículo 18 del Código Penal relativo a la retroactividad de la ley posterior más favorable, toda vez que, en el caso de autos y en el punto en análisis ésta es, claramente, la Ley N° 21.000, dado que determina necesariamente el cómputo de intereses totales (sanción por retardo en el pago de la multa) inferiores a los que cabría concluir de estimar aplicables las normas del Decreto Ley N° 3538. En este punto cabe puntualizar que dicho principio se aplica no sólo al derecho penal, sino también al derecho administrativo sancionador, por cuanto su fundamento radica precisamente en la naturaleza sancionadora de la norma, que comparten ambos estatutos.

Finalmente, también la interpretación que se viene sosteniendo, resulta armónica con el artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República y los principios derivados del debido proceso, el



derecho a la acción y a la tutela judicial efectiva, puesto que al no permitir el devengo de intereses en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada que desestime en algún sentido el reclamo judicial contra los mismos, se favorece el legítimo y efectivo ejercicio del derecho a la acción judicial -de reclamación de la multa- y a la tutela judicial efectiva, que no se van a ver desincentivados por el hecho de suponer finalmente, dicho ejercicio del derecho, un aumento o encarecimiento de la sanción impuesta mediante el devengo de intereses durante el tiempo que dure el respectivo juicio.

Decimotercero: Que lo razonado precedentemente no se desvirtúa por el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, por cuanto si bien el artículo 51 de la Ley N° 19.880 establece que los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, hace salvedad respecto de aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario; y esto último es lo que ocurre, precisamente, en la especie con los artículos 1° permanente y 5° transitorio de la Ley N° 21.000, normas que, al hacer inaplicables las del Decreto Ley N° 3538 a los intereses de la multa impuesta y, por el contrario, dar aplicación a la Ley 21.000, conforme a la cual en caso de haberse reclamado judicialmente contra la resolución que impuso la multa los intereses se devengan una vez ejecutoriada la sentencia respectiva, pospuso la ejecutoriedad de la resolución de multa en dicho evento y, en consecuencia, dispuso algo diverso a la ejecutoriedad inmediata en caso de existir reclamo judicial.

Por otra parte, atendido todo lo explicitado, los pretendidos intereses a partir del undécimo día siguiente a la notificación de la resolución de multa nunca se radicaron en el patrimonio fiscal, porque ello suponía que tuviera aplicación la normativa del Decreto Ley N° 3538; cuestión que, como se ha visto, no concurre en la especie.

Decimocuarto: Que, de esta manera, al haber la resolución recurrida, estimado aplicables al devengo y al inicio del cómputo de los intereses de la multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros a Roberto Guzmán Lyon, las normas del Decreto Ley N° 3538 que, como se ha establecido, son inaplicables al caso, incumpliendo en consecuencia lo prescrito en los artículos 1° permanente y 5° transitorio de la Ley N° 21.000 de acuerdo al correcto sentido y alcance que les ha



sido precisado en los motivos que anteceden, y al haber, con ello, dejado de aplicar los artículos 59 y 62 de esta última ley -debiendo haberlo hecho-; aquel acto reclamado es, efectivamente, ilegal.

Decimoquinto: Que atendido lo anterior y considerando que, además, la ilegalidad antes indicada ha implicado un aumento muy considerable de la sanción impuesta a la reclamante por concepto de intereses, aquella ciertamente le provoca un perjuicio pecuniario.

Decimosexto: Que, en consecuencia, se cumplen en la especie la totalidad de los requisitos que exige el artículo 70 de la Ley 21.000 para que la acción de ilegalidad ejercitada en autos pueda prosperar, motivo por el cual será acogida, en los términos que se dirán en lo resolutive.

Decimoséptimo: Que, estimando que la reclamada perdidosa tuvo motivos plausibles para litigar, cada parte pagará sus costas.

En razón de lo anterior y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes de la Ley N° 19.880 y en el artículo 70 de la Ley N° 21.000, **se acoge**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Roberto Guzmán Lyon en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, y en consecuencia se declara que la Resolución Exenta N° 1429, de 25 de febrero de 2022, es ilegal, por lo que se deja la misma sin efecto, debiendo la autoridad reclamada resolver la reposición administrativa deducida contra el Oficio Ordinario N° 9305 de 28 de enero de 2022 como en derecho corresponda, considerando que todo aquello relativo al devengo e inicio del cómputo, en su caso, de los eventuales intereses de la multa impuesta al reclamante mediante la Resolución Exenta N° 223 por la Ex Superintendencia de Valores y Seguros se rigen por los artículos 59 y 62 de la Ley N° 21.000.-

Redacción del ministro interino Matías de la Noi Merino.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol Contencioso-Administrativo N° 103-2022.-





TLXDBHJMY

Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Miguel Eduardo Vazquez P., Ministro Suplente Matias Felipe De La Noi M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

